

Los rostros de la autoridad. Gobiernos, políticas y fuerzas de orden público en el segundo bienio republicano, 1933-1936*

Sergio Vaquero Martínez

Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción

La etapa radical-cedista de la Segunda República ha sido conocida tradicionalmente como el “bienio negro” por el salto cuantitativo y cualitativo que dio la represión estatal en Octubre de 1934. Esta denominación ha provocado que las autoridades políticas y las fuerzas de orden público se hayan situado en el centro del debate historiográfico.

La tesis continuista sostiene la pervivencia del modelo autoritario de la Restauración basado en la vulneración de las garantías constitucionales mediante la proclamación de los estados de excepción, el restablecimiento de la hegemonía de las élites tradicionales y del sistema de dominación de clase, la represión del proletariado como el “enemigo interno” por parte de una Guardia Civil que actuaba como un “ejército de ocupación” y la incapacidad de los gobernantes de superar una concepción decimonónica del orden público que anteponía el principio de autoridad al respeto por los derechos civiles y de democratizar a unas fuerzas coactivas ultraconservadoras, nacionalistas y militaristas más proclives al uso de la represión que de la prevención.¹

La interpretación discontinuista subraya la aparición de concepciones y fuerzas de orden público modernas como en otras democracias europeas, la autonomía de la Benemérita respecto a las élites rurales, su difícil posición entre las presiones de los sindicatos y las del Ejército, el carácter no violento de la mayoría de sus intervenciones, la tensión entre los proyectos de reorganización civilistas y militaristas y el objetivo de buena parte de los gobiernos del segundo bienio de fortalecer la autoridad policial a costa de aplicar una política contrarreformista en relación a la etapa anterior.²

Por último, la tesis corporativa mantenida desde los actuales cuerpos de seguridad destaca la neutralidad policial respecto al régimen político y la “faceta humanitaria” de su servicio, y critica a los gobernantes por intentar continuamente reformar las instituciones coercitivas, entregar la función del mantenimiento del orden a

* Esta comunicación es el resultado de una investigación doctoral financiada mediante una ayuda para la formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, convocatoria de 2013.

¹ Manuel Ballbé, *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Madrid, Alianza, 1983, pp. 336, 363 y 380; Mario López Martínez, *Orden público y luchas agrarias en Andalucía. Granada, 1931-1936*, Madrid, Ediciones Libertarias-Ayuntamiento de Córdoba, 1995, pp. 65 y 75; y Eduardo González Calleja, *En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República española (1931-1936)*, Granada, Comares, 2014, pp. 51-53.

² Gerald Blaney, Jr., “Keeping Order in Republican Spain, 1931-1936”, en Gerald Blaney, Jr., *Policing Interwar Europe. Continuity, Change and Crisis, 1918-1940*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 31-68, pp. 32, 34, 36, 42-44 y 46; y Diego Palacios Cerezales, “Ansias de normalidad. La policía y la República”, en Fernando del Rey Reguillo, *Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española*, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 596-646, pp. 627, 633, 638 y 644-645.

las autoridades militares, emplear mal a las fuerzas policiales y no defenderlas de los ataques de sus enemigos tradicionales, consintiendo el deterioro de su “prestigio”.³

La siguiente comunicación pretende abordar una cuestión que posiblemente no ha merecido la atención suficiente por parte de la historiografía: el impacto que tuvieron en la configuración de las políticas de orden público del segundo bienio las relaciones de presión, negociación y competición entre los principales actores estatales que ejercían efectivamente la autoridad: los Gobiernos, la Guardia Civil y los Cuerpos de Investigación y Vigilancia y de Seguridad y Asalto que componían la Policía Gubernativa, en el marco de la tradicional disputa entre los poderes civil y militar por controlar la administración del orden. Para ello se han trabajado como fuentes primarias la *Gaceta de Madrid*, las memorias de los miembros más importantes del Gobierno y las revistas policiales y militares más relevantes de la época. En cuanto a la hipótesis, en lugar de defender que los problemas de orden público derivaron de la aplicación de unas políticas basadas en el mantenimiento predemocrático del principio de autoridad, se sustentará que fueron el resultado de una disputa entre los diferentes actores que encarnaban dicha autoridad por imponer sus intereses y sus concepciones de la misma, ya que algunos de estos significados eran notoriamente diferentes respecto al pasado.

2. El robustecimiento de la autoridad

El hombre clave en la construcción de las políticas de orden público en los gobiernos de 12 de septiembre y 9 de octubre de 1933 fue Diego Martínez Barrio, primero como ministro de la Gobernación y después como presidente tras cederle dicha cartera a Manuel Rico Avello. El ministro sevillano entendía que todo régimen nuevo requería el “robustecimiento de la autoridad” de las instituciones políticas y los organismos estatales y prefería “prevenir los actos mejor que sancionarlos, y cuando son producidos sancionarlos sin crueldad”, aplicando la ley a ambos lados del espectro político.⁴ En consecuencia, la recepción de las fuerzas del orden fue positiva aunque hubo una diferencia significativa. Mientras que la policía consideraba que el nombramiento como director general de Seguridad del capitán José Valdivia podía suponer que sus reivindicaciones recibieran una mayor atención por haber servido muchos años en los Cuerpos de Seguridad y de Investigación y Vigilancia, la Benemérita hacía más hincapié en recordar a las nuevas autoridades el respeto por sus valores tradicionales: disciplina férrea, cumplimiento del deber y apartamiento de la política.⁵

Las primeras disposiciones ejecutivas trataron de satisfacer los objetivos policiales de modernización, profesionalización y autonomía respecto al poder político. El 23 de septiembre se reconoció la existencia de la Oficina de Información y Enlace,

³ Martín Turrado Vidal, *La Policía en la historia contemporánea de España (1766-1986)*, Madrid, Ministerio del Interior-Dykinson, 2000, pp. 11, 13 y 17; Miguel López Corral, *La Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y a sus hombres (1844-1975)*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009, pp. 18 y 296; y Julio de Antón, *Policía y Guardia Civil en la España republicana*, Madrid, Edibeso Wells, 2001, p. 39.

⁴ Diego Martínez Barrio, *Memorias*, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 316 y 218.

⁵ “D. José Valdivia, Director general de Seguridad”, *Policía Española*, 16-IX-1933, n.º 1.370, pp. 9-10; y “Los nuevos ministro y subsecretario de Gobernación”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, octubre de 1933, n.º 284, p. 364.

encargada de custodiar y gestionar los registros de antecedentes criminales, nombrando como jefe interino al capitán de la Guardia Civil Vicente Santiago Hodson. La medida fue bien acogida por la prensa policial porque estaba destinado en el Cuerpo de Seguridad, aunque no dejaba de advertir que “los gobiernos son variables y transitorios; la policía nacional es única, homogénea y permanente”.⁶ Para fortalecer su apoyo, el Gobierno ordenó que los jubilados y familiares de los agentes de Vigilancia y Seguridad pudieran solicitar anticipos mientras se tramitaban sus pensiones de viudedad y orfandad; el sobreseimiento de los expedientes contra los funcionarios de todos los cuerpos dependientes de la DGS salvo faltas muy graves, permitiendo el reingreso de numerosos oficiales que habían sido depurados en el primer bienio; y la adquisición de 89 camionetas y 38 automóviles ligeros.⁷ Sin embargo, también se aprobaron otras disposiciones que generaron rechazo, como el traspaso de los servicios de los Cuerpos de Investigación y de Seguridad a la Generalitat de Cataluña el 15 de noviembre, lo que fue criticado por la prensa policial por el perjuicio económico que supondría para aquellos agentes que solicitaran el traslado. Además, la inminencia de las elecciones generales sacó a la luz un clásico problema de los agentes de Seguridad ya que, por estar organizados militarmente y mandados por oficiales del Ejército, muchos tenían problemas para votar pese a ser civiles y las autoridades no eran capaces de resolverlo.⁸

También hubo medidas para atraer a la Guardia Civil. El 18 de octubre se transformó la odiada Sección especial del Ministerio de la Gobernación, que había sido creada en el primer bienio para hacerse cargo de todo lo relacionado con el personal y el régimen interior en lugar del Ministerio de la Guerra, en un negociado de la Inspección General integrado por miembros del Instituto y no por técnicos civiles, lo que no era sino una más de las muchas “contrarreformas” que pedían los guardias para subsanar la “deformación” que había producido un “Ministro civil” incapaz de comprender las dificultades de un “Instituto de abolengo militar”.⁹ Además, el 30 de noviembre se aprobó el reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la Benemérita, lo que reportaba unos derechos y unos haberes similares a sus homónimos del Ejército, incluyendo unas correcciones necesarias en lo tocante a las edades de ingreso y jubilación. Sin embargo, todo ello quedó eclipsado por el traspaso de sus servicios a la Generalitat el 8 de diciembre, porque la mayoría de los guardias dudaba de que fuera factible esa “dependencia o relación entre la Generalidad y un servicio tan nacional, tan del Estado unitario, tan español, tan indivisible, como el de la Guardia Civil”.¹⁰

⁶ *Gaceta de Madrid*, 24-IX-1933, n.º 267, p. 1.861; *Gaceta de Madrid*, 28-IX-1933, n.º 271, p. 1.921; y “La esperanza del momento”, *Policía Española*, 2-X-1933, n.º 1.371, pp. 5-6.

⁷ *Gaceta de Madrid*, 4-X-1933, n.º 277, p. 76; *Gaceta de Madrid*, 15-X-1933, n.º 288, pp. 414-415; *Gaceta de Madrid*, 18-XI-1933, n.º 322, p. 1.134; *Gaceta de Madrid*, 3-XII-1933, n.º 337, pp. 1.462-1.463; y Gerald Blaney, Jr., “Keeping Order...”, p. 50.

⁸ *Gaceta de Madrid*, 16-XI-1933, n.º 320, pp. 1.082-1.084; “Antiguos anhelos corporativos”, *Policía Española*, 16-I-1934, n.º 1.378, p. 7; y “El voto de los funcionarios de Seguridad”, *Policía Española*, 2-XII-1933, n.º 1.375, p. 7.

⁹ *Gaceta de Madrid*, 19-X-1933, n.º 292, pp. 489-491; y “Las reformas”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, diciembre de 1933, n.º 286, pp. 453-456.

¹⁰ *Gaceta de Madrid*, 2-XII-1933, n.º 336, pp. 1.436-1.440; *Gaceta de Madrid*, 9-XII-1933, n.º 343, pp. 1.654-1.656; y “El traspaso de los servicios a la Generalidad”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, enero de 1934, n.º 287, p. 31.

El principal desafío al orden público del periodo fue la insurrección anarcosindicalista de diciembre, de la que la guardia civil resaltó el recuerdo de sus “once mártires” y la debilidad de sus casas-cuarteles, esas “casucas de adobe, misérrimas” que fueron defendidas por unos hombres dispuestos a “morir por la sociedad” frente a esa “horda salvaje, indigna de haber nacido en España”. La Policía también elogió el arrojo de la “fuerza pública defensora de la República” contra esos “elementos subversivos” responsables de “actos de salvaje crueldad sin precedente”, si bien su juicio se fue atemperando hasta llegar a reconocer que el problema del orden público “no es sólo una cuestión de Policía” sino de “leyes equitativas que encaucen principios e ideologías, fundados en humanitarias y justas reivindicaciones”.¹¹

La respuesta gubernamental fue acrecentar el reconocimiento de la fuerza pública declarando los sucesos “hechos de guerra” para recompensar a los heridos, muertos o miembros distinguidos del Ejército, la Guardia Civil y el Cuerpo de Seguridad y Asalto. Esta consideración se extendió a ciertos sucesos acaecidos entre abril de 1931 y marzo de 1932 y a la insurrección de enero de 1933, incluyendo los hechos de Casas Viejas. Para la policía esto suponía acabar con una “desigualdad que no debía subsistir” porque entendía que el Cuerpo de Seguridad había intervenido militarmente como la Benemérita, la cual recibió como compensación el reconocimiento de otros sucesos, incluidos los de Hermigua de marzo de 1933.¹² El broche fue la apertura de una suscripción en favor de la fuerza pública en la que participaron los presidentes de la República y del Gobierno, entre numerosos donantes del ámbito empresarial, y la concesión de la Orden de la República a José Valdivia, Vicente Santiago y al inspector general Cecilio Bedía.¹³

Las últimas medidas gubernamentales se centraron en controlar la circulación ilegal de armas. A mediados de febrero se modificó el reglamento de fabricación y tráfico de explosivos de 1920 y se aprobó otro sobre fabricación, comercio y tenencia de armas que reforzaba las atribuciones fiscalizadoras de la DGS y la Guardia Civil. Un mes después se publicó una disposición que procuraba restringir el empleo de las mismas a las fuerzas policiales en activo: la anulación de todas las licencias de armas expedidas por la Dirección General de Prisiones antes del 1 de enero de 1934.¹⁴

3. El armamento de la contrarrevolución

Rafael Salazar Alonso, ministro de la Gobernación desde el 3 de marzo de 1934, defendía una política contrarreformista guiada por el objetivo de que “la Guardia civil

¹¹ “La más gloriosa, de entre las gloriosas páginas del libro de oro de la Guardia Civil, estaba escrita de por vida, en las fechas que comprenden del 8 al 13 de diciembre de 1933”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, enero de 1934, n.º 287, pp. 31-32; “Éxito pleno de una actuación”, *Policía Española*, 16-XII-1933, n.º 1.376, p. 9; y “Enseñanzas de los pasados sucesos”, *Policía Española*, 2-I-1934, n.º 1.377, pp. 7-9.

¹² *Gaceta de Madrid*, 15-XII-1933, n.º 349, p. 1.834; *Gaceta de Madrid*, 24-XII-1933, n.º 358, p. 2.109; *Gaceta de Madrid*, 30-XII-1933, n.º 364, p. 2.290; “Se declaran hechos de guerra los pasados sucesos”, *Policía Española*, 2-I-1934, n.º 1.377, p. 16; *Gaceta de Madrid*, 24-XII-1933, n.º 358, p. 2.109; y *Gaceta de Madrid*, 30-XII-1933, n.º 364, p. 1.

¹³ *Gaceta de Madrid*, 1-I-1934, n.º 1, p. 8; y “Homenaje”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, marzo de 1934, n.º 289, p. 117.

¹⁴ *Gaceta de Madrid*, 18-II-1934, n.º 49, pp. 1.330-1.331; *Gaceta de Madrid*, 16-II-1934, n.º 47, pp. 1.284-1.291; y *Gaceta de Madrid*, 3-III-1934, n.º 62, p. 1.725.

sea, ante todo, Guardia civil” para que recuperara su “interior satisfacción”, con el fin de consolidar su recién adquirida preeminencia política mediante la cooptación del aparato coercitivo del Estado.¹⁵ Para conseguirlo suprimió la Secretaría técnica constituida en marzo de 1933 para estudiar la coordinación entre los Cuerpos de Vigilancia y de Seguridad y la Guardia Civil, y creó en la Inspección General un Negociado de intervención de armas y explosivos para gestionar la coordinación con otros cuerpos. Esta decisión despertó las simpatías del Instituto porque reforzaba su autonomía pero no las de sus colegas civiles, que preferían la creación de un “Ministerio de Policía” que dirigiera todas las fuerzas. Tal vez por ello el ministro decidió lanzar una medida que contentara a todos: el 20 de marzo ordenó la contratación de mil guardias de Asalto y 1.200 guardias de segunda de Infantería para la Benemérita.¹⁶

Por otra parte, Salazar Alonso creía que debía organizar una “contrarrevolución” asentada en la cooperación de los ciudadanos de orden, los comerciantes y los propietarios industriales frente a los enemigos del Estado que preparaban la revolución.¹⁷ Un deseo que se materializó en una política ambivalente respecto a las armas, que pasaba de relajar las medidas de control para no entorpecer a la industria armamentística y ampliar en dos meses el plazo para legalizar la posesión de armas – plazo que fue renovando en los meses siguientes– a endurecer el reglamento de fabricación y tenencia y prohibir la adquisición de ciertas armas sin previa licencia de la autoridad, como las escopetas de caza, para impedir que se armaran los sindicatos. Esta tentativa fue elogiada por la policía, especialmente tras la huelga del Sindicato de Artes Gráficas, de la que destacó la recuperación del “aliento de ciudadanía” y el “principio de autoridad” gracias a la “confortadora reacción de energía” de un ministro dispuesto a garantizar la “libertad de trabajo” y acabar con las “amenazas destructoras”.¹⁸

Su motivación de reorganizar las fuerzas policiales le llevó a formar una comisión que confeccionara una nueva ley de Policía, pero nunca llegó a ser aprobada. La Guardia Civil se mostraba optimista porque conocía la voluntad de Salazar de dejar “quieto al Instituto de reformas orgánicas” para que volviese a los “tiempos de su fundador”, el duque de Ahumada. La prensa policial criticaba que no hubiera ningún técnico de la Policía en la comisión y que cada director de Seguridad intentara una reforma, generando un “estado caótico” que hacía temblar a los agentes cuando escuchaban la palabra “reorganización”; insistía en que lo más cercano al “ideal policial” era el Reglamento de Mola de 1930, teóricamente suspendido en la etapa anterior; y proclamaba la necesidad de potenciar la “Policía *preventiva*” y darle un “carácter más democrático” a la “*represiva*” para que “sean respetadas más por lo que

¹⁵ Rafael Salazar Alonso, *Bajo el signo de la Revolución*, Madrid, Imp. Sáez Hermanos, 1935, pp. 34-35; y Gerald Blaney, Jr., “Keeping Order...”, p. 50.

¹⁶ *Gaceta de Madrid*, 13-III-1934, n.º 72, p. 1.948; *Gaceta de Madrid*, 14-III-1934, n.º 73, p. 1.972; “Nuevo Gobierno, disolución de Cortes y elecciones”, *Policía Española*, 16-X-1933, n.º 1.372, p. 5; y *Gaceta de Madrid*, 22-III-1934, n.º 81, pp. 2.187-2.188.

¹⁷ Rafael Salazar Alonso, *Bajo el signo...*, pp. 80-81 y 267.

¹⁸ *Gaceta de Madrid*, 24-III-1934, n.º 83, p. 2.255; *Gaceta de Madrid*, 10-IV-1934, n.º 102, p. 263; *Gaceta de Madrid*, 12-IV-1934, n.º 102, p. 264; *Gaceta de Madrid*, 16-VI-1934, n.º 167, pp. 1.748-1.749; *Gaceta de Madrid*, 14-VIII-1934, n.º 226, p. 1.475; y “Principio de autoridad y espíritu de ciudadanía”, *Policía Española*, 19-IV-1934, n.º 1.382, p. 11.

representan que por lo belicoso de su armamento”.¹⁹ Sin embargo, el resultado de esta política militarizadora y centralizadora, impulsada por Muñoz Grandes desde la dirección del Cuerpo de Seguridad, fue que el diseño policial del primer bienio quedara irreconocible, que la Guardia Civil funcionase como antes de la República y que la Guardia de Asalto sumase fuerza a la misma lógica.²⁰

La principal concesión al Instituto tuvo lugar el 24 de abril con la aprobación de la amnistía de los guardias civiles, militares y asimilados condenados por la Sanjurjada, respondiendo así a las demandas de la prensa militar, que había invocado “la generosidad, la fraternidad y la igualdad republicana”, al tiempo que defendía la pena de muerte contra “los pistoleros disfrazados de políticos, y los políticos que no son sino pistoleros del orden público y de la paz social”.²¹ La respuesta de la policía, en cambio, fue lacónica porque suponía la salida de 3.539 presos, de los de que 1.455 habían sido condenados por tenencia ilícita de armas y otros 531 por atentado. Por otro lado, el ministro ordenó que el 4º Tercio Móvil de Ferrocarriles volviera a ser el Tercio Móvil de Madrid aunque equipado con vehículos motorizados para poder acometer concentraciones por toda la península, lo que le permitiría potenciar el recurso de la “vigilancia preventiva” para recurrir menos a la fuerza, según la prensa del Instituto.²²

Asimismo, Salazar Alonso, que entendía que toda huelga contra las decisiones del Gobierno o las Cortes era ilegal y revolucionaria, declaró la próxima cosecha “servicio público nacional” para anticiparse a los planes de la FNTT y potenció la “colaboración social”, lo que fue aplaudido por una prensa militar que consideraba que la “sociedad amenazada, ha de defenderse, naturalmente, y la defensa mediante el trabajo es también más progresiva y civilizada que la defensa a tiros”.²³ Esta orientación se reforzó con la presentación de un proyecto de ley, que se aprobaría finalmente en octubre, invirtiendo casi cuarenta y siete millones de pesetas en los cuerpos de orden público: un aumento de 2.000 guardias civiles y 4.000 de Seguridad que fue elogiado por todas las fuerzas; especialmente por la Benemérita, que esperaba ser capaz de mantener un mínimo siete guardias por destacamento.²⁴ Ello hizo precisa una reorganización de sus fuerzas en 23 Tercios que daba respuesta a otra reivindicación del Instituto: la sustitución de las Mayorías de las Zonas por un organismo similar en las Comandancias. Con todo, no todos los guardias civiles simpatizaban con esta política

¹⁹ *Gaceta de Madrid*, 19-IV-1934, n.º 109, pp. 369-370; “¿Reformas?”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, junio de 1934, n.º 292, pp. 229-230; “La nueva ley de seguridad”, *Policía Española*, 16-VI-1934, n.º 1.388, p. 18; “La nueva Ley de Seguridad”, *Policía Española*, 2-VI-1934, n.º 1.387, pp. 9-10; y “Sobre los procedimientos preventivos”, *Policía Española*, 2-VII-1934, n.º 1.389, pp. 7-8.

²⁰ Diego Palacios Cerezales, “Ansias de normalidad...”, p. 628.

²¹ *Gaceta de Madrid*, 25-IV-1934, n.º 115, pp. 548-549; *Gaceta de Madrid*, 8-V-1934, n.º 128, pp. 909-910; y “La generosidad del Estado refuerza la autoridad y garantiza la paz social”, *Marte*, 10-IV-1934, n.º 1.448, p. 3.

²² Diego Palacios Cerezales, “Ansias de normalidad...”, p. 630; *Gaceta de Madrid*, 27-V-1934, n.º 147, p. 1.328; “La contrarreforma”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, mayo de 1934, n.º 291, p. 209; y “El proyecto de aumento de 2.000 hombres para reforzar los Puestos, y otras mejoras”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, junio de 1934, n.º 292, p. 240.

²³ Rafael Salazar Alonso, *Bajo el signo...*, pp. 146-147; *Gaceta de Madrid*, 30-V-1934, n.º 150, pp. 1.387-1.388; y “La revolución”, *Marte*, 8-III-1934, n.º 1.442, p. 1.

²⁴ *Gaceta de Madrid*, 30-VI-1934, n.º 181, pp. 2.059-2.063; y “El proyecto de aumento de 2.000 hombres para reforzar los Puestos, y otras mejoras”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, junio de 1934, n.º 292, p. 240; y *Gaceta de Madrid*, 17-X-1934, n.º 290, p. 379.

militarista y, de hecho, surgieron voces exigiendo que se aclarase si su carácter era civil o militar porque ello afectaba directamente a sus derechos.²⁵

Otra característica de la política de Salazar Alonso fue la concesión gratuita de licencias de armas cortas a los agentes y militares retirados para usarlos como fuerza de reserva. Comenzó haciéndolo con los generales, jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y cabos de los Cuerpos de Investigación y Vigilancia, Guardia Civil, Carabineros y Seguridad y Asalto, aunque acabó extendiéndolo a todos sus miembros.²⁶ Esta medida fue bien acogida por la policía porque corregía otra desigualdad respecto a la guardia civil y completaba la posibilidad otorgada previamente a los jubilados de Investigación y Vigilancia de seguir ejerciendo como agentes honorarios.²⁷ Por otro lado, las presiones de la patronal llevaron al ministro nuevamente a modificar su política armamentística. En agosto se publicó que ciertas industrias habían pedido modificar determinadas disposiciones que les perjudicaban en una comisión que había sido formada en mayo para unificar la legislación sobre armas y explosivos y en la que había cinco miembros de la Cámara Armera de Éibar, los cuales consiguieron que se volviera a permitir que las armas largas de cañón estriado pudieran ser vendidas sin licencia.²⁸

Por último, a finales de agosto se prohibió a los menores de 16 años pertenecer a asociaciones políticas y se obligó a los menores de 20 a presentar una autorización paterna. Además, el día 31 se suprimió el sistema de “reenganche” que obligaba a los guardias y cabos con menos de seis años de servicio a pasar ciertas pruebas para demostrar su compromiso, una “reminiscencia de sistemas de reclutamiento” que resultaba “oprobiosa” por la desconfianza que implicaba.²⁹ Finalmente, el 22 de septiembre se autorizó a los jefes, oficiales y asimilados de la Guardia Civil a vestir de paisano, una medida que ya había sido demandada desde el Instituto para facilitar la recogida de información pero que despertó rechazo entre los agentes de Investigación.³⁰

4. La pacificación del territorio

La revolución de Octubre de 1934 fue acompañada de una sangrienta represión dirigida por Franco a petición del ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, que decidió enviar a las tropas del Protectorado por estar más habituadas a la lucha de guerrillas y al armamento

²⁵ *Gaceta de Madrid*, 6-VII-1934, n.º 187, pp. 187-188; “Las reformas”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, marzo de 1934, n.º 289, pp. 119-120; y “Las reformas”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, julio de 1934, n.º 293, p. 280.

²⁶ *Gaceta de Madrid*, 8-V-1934, n.º 128, pp. 912-913; *Gaceta de Madrid*, 21-VI-1934, n.º 172, p. 1.863; *Gaceta de Madrid*, 29-VI-1934, n.º 180, p. 2.037; *Gaceta de Madrid*, 4-VII-1934, n.º 185, p. 123; *Gaceta de Madrid*, 7-VII-1934, n.º 188, p. 234; *Gaceta de Madrid*, 14-VII-1934, n.º 195, p. 507; y *Gaceta de Madrid*, 18-VII-1934, n.º 199, p. 620.

²⁷ “Se concede a los jubilados de Seguridad”, *Policía Española*, 2-VII-1934, n.º 1.389, p. 22; “Licencia gratuita para uso y tenencia de armas”, *Policía Española*, 16-V-1934, n.º 1.386, p. 9; y *Gaceta de Madrid*, 22-VI-1934, n.º 173, p. 1.881.

²⁸ *Gaceta de Madrid*, 14-VIII-1934, n.º 226, pp. 1.475-1.476; *Gaceta de Madrid*, 18-V-1934, n.º 138, p. 1.129; y *Gaceta de Madrid*, 5-IX-1934, n.º 248, p. 2.070.

²⁹ *Gaceta de Madrid*, 31-VIII-1934, n.º 243, pp. 1.893-1.894; *Gaceta de Madrid*, 2-IX-1934, n.º 245, p. 1.990; y “¡Albricias!”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, octubre de 1934, n.º 296, p. 403.

³⁰ *Gaceta de Madrid*, 25-IX-1934, n.º 268, p. 2.623; “En pro del servicio”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, abril de 1935, n.º 302, p. 172; y “Por dignificación profesional”, *Policía Española*, 2-VI-1935, n.º 1.411, p. 8.

de guerra.³¹ El Gobierno además declaró el estado de guerra en toda España; autorizó la cooperación de soldados, oficiales y clases de complemento, incluyendo a los retirados; militarizó a los guardias municipales y al resto de agentes locales; y creó una Auditoría y una Fiscalía militares en Asturias para aplicar el fuero marcial.³² Como consecuencia, el discurso de la prensa corporativa se radicalizó recordando a esos “mártires del deber” que habían muerto “en holocausto de la Patria” defendiendo “las conquistas de la civilización” y protegiendo sus casas-cuarteles como “vanguardia del Ejército” ante la “cobarde ferocidad de las hordas sanguinarias”, mientras exigía “pulverizar esas casas de la ambición, del egoísmo, de la traición, que se llaman Casas del Pueblo”.³³

Eloy Vaquero, nuevo ministro de la Gobernación, también buscaba “fortalecer al Estado” y acrecentar la “interior satisfacción” de los guardias aunque negaba la construcción de un “Estado gendarme”.³⁴ Sin embargo, su propuesta de separar los Cuerpos de Seguridad e Investigación para reorganizar el primero como la Benemérita iba “contra la propia contextura del organismo, de eminentísimo carácter civil y local” y “contra las esencias democráticas del régimen”, según una prensa policial que, por otra parte, llevaba largo tiempo reclamando el derecho de asociación.³⁵ Las medidas más importantes del ministro fueron dar por finalizados los cursos en la Escuela de Policía Española para que sus alumnos ingresaran cuanto antes en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia y reconocer oficialmente el Servicio de Investigación de la DGS creando una Inspección General que coordinara y centralizara todos los registros dactilográficos, fotográficos y archivísticos sobre los delincuentes.³⁶

Cuando ya estaba todo “pacificado” el Gobierno emitió nuevas disposiciones: nombró delegado del Ministerio de la Guerra para el orden público a Lisardo Doval y creó el cargo de Gobernador general en Asturias; militarizó al personal y los depósitos de las fábricas armeras y de explosivos; declaró caducadas todas las licencias de uso de armas, incluidas las de caza; y decretó la recuperación estatal de los servicios de orden público de la Generalitat, lo que culminaría el 5 de enero de 1935 con la designación como gobernador general de Cataluña de Manuel Portela Valladares.³⁷ Esta reversión fue lógicamente aplaudida por la prensa policial, que afirmaba que estos servicios

³¹ Diego Hidalgo, *¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra? Diez meses de actuación ministerial*, Madrid, Espasa-Calpe, 1934, pp. 86-88.

³² *Gaceta de Madrid*, 7-X-1934, n.º 280, p. 194; *Gaceta de Madrid*, 9-X-1934, n.º 282, p. 228; *Gaceta de Madrid*, 14-X-1934, n.º 287, p. 332; y *Gaceta de Madrid*, 17-X-1934, n.º 290, p. 379.

³³ “La fracasada revolución”, *Policía Española*, 19-X-1934, n.º 1.396, pp. 7-8; “La legión de mártires del deber en las fuerzas de Seguridad”, *Policía Española*, 2-XI-1934, n.º 1.397, pp. 11-12; “Llor a ‘La Benemérita’”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, noviembre de 1934, n.º 297, p. 425, “Gloria a los héroes”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, noviembre de 1934, n.º 297, p. 426; y “¡Miedo!”, *Marte*, 20-XI-1934, n.º 1.471, p. 1.

³⁴ “Las principales aspiraciones de la Guardia Civil serán en breve satisfechas”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, febrero de 1935, n.º 300, pp. 75-76; y “La proyectada reorganización”, *Policía Española*, 2-II-1935, n.º 1.403, p. 8.

³⁵ “Las reorganizaciones en proyecto”, *Policía Española*, 2-III-1935, n.º 1.405, p. 20; y “Atribuciones y derechos”, *Policía Española*, 2-X-1934, n.º 1.395, p. 10.

³⁶ *Gaceta de Madrid*, 17-X-1934, n.º 290, p. 379; y *Gaceta de Madrid*, 27-X-1934, n.º 300, p. 754.

³⁷ Diego Hidalgo, *¿Por qué fui lanzado...*, p. 95; *Gaceta de Madrid*, 2-XI-1934, n.º 306, p. 928; *Gaceta de Madrid*, 10-XI-1934, n.º 314, pp. 1.179-1.180; y *Gaceta de Madrid*, 27-XI-1934, n.º 331, p. 1.613; y *Gaceta de Madrid*, 6-I-1935, n.º 6, p. 146.

debían tender a la centralización y no a la fragmentación y que el Estado necesitaba tener libres sus dos brazos armados para defenderse: el Ejército y la Policía.³⁸

Asimismo las recompensas para la fuerza pública se incrementaron sustancialmente. El Gobierno se hizo cargo de una suscripción pública iniciada por “feliz y espontánea iniciativa popular”, tomó medidas para que las mujeres y los hijos de los funcionarios fallecidos en octubre recibieran escrupulosamente sus pensiones y calificó los sucesos como “hechos de guerra”, satisfaciendo nuevamente la reivindicación policial de que la recompensa fuera militar porque los guardias de Seguridad habían actuado revestidos de ese carácter junto a las unidades del Ejército.³⁹

Por otra parte, las Cortes habían restablecido la pena de muerte para castigar los atentados con explosivos y los atracos con violencia, una medida que fue bien recibida por la prensa del Instituto pese a que meses atrás había respaldado la abolición.⁴⁰ Por esta cuestión las relaciones entre Gil Robles, enemigo de la “impunidad” y defensor de un “inflexible criterio de rigor”, y Alcalá-Zamora y Lerroux se agriaron, especialmente tras el indulto de los militares sublevados Enrique Pérez Farrás y Federico Escofet. Esta medida se completaría con la promulgación de una ley de tenencia de armas de fuego que endureció las medidas de control y las sanciones contra las asociaciones políticas.⁴¹

También hubo cambios para la Policía Gubernativa, destacando el reingreso de los funcionarios de Investigación y Vigilancia y de Seguridad que habían pasado al servicio de la Generalitat, sin perjuicio de la responsabilidad que se les pudiera exigir por la insurrección. Además se autorizó la adquisición de armamento y municiones para equipar a los 3.804 guardias civiles segundos creados por la ley de 13 de octubre, se anunciaron oposiciones para cubrir las vacantes del Cuerpo de Seguridad y constituir una escala de aspirantes y se aprobó otra ley creando 164 plazas de conductores de primera y otras tantas de segunda y ordenando la compra de 160 camionetas y cuatro automóviles blindados con ametralladora para la Guardia Civil.⁴²

Los homenajes a las víctimas y sus familiares también crecieron. En enero se concedió una pensión vitalicia de 1.500 pesetas anuales a las familias de las personas “violentamente muertas a manos de los revolucionarios”, excluyendo a aquellas que tuvieran rentas altas, y se otorgó la Medalla de Sufrimientos por la Patria a las de ciertas víctimas que tuvieron mayor presencia mediática. En febrero se concedió la Corbata de la Orden de la República a la Guardia Civil por sus “innumerables actos heroicos” y sus “relevantes servicios de carácter cívico y humanitario”, en compensación por la campaña de la izquierda obrera contra la represión de Asturias.⁴³

³⁸ “Nuestras previsiones, confirmadas”, *Policía Española*, 19-X-1934, n.º 1.396, pp. 10-11.

³⁹ *Gaceta de Madrid*, 21-X-1934, n.º 294, p. 546; *Gaceta de Madrid*, 29-XI-1934, n.º 333, p. 1.696; *Gaceta de Madrid*, 2-XI-1934, n.º 306, pp. 923-924; y “A iguales sacrificios, recompensas iguales”, *Policía Española*, 2-XII-1934, n.º 1.399, pp. 7-8.

⁴⁰ *Gaceta de Madrid*, 17-XI-1934, n.º 231, pp. 1.349-1.350; y “Dos líneas y una reflexión”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, mayo de 1934, n.º 291, pp. 208-209.

⁴¹ José María Gil Robles, *No fue posible la paz*, Barcelona, Ariel, 1968, pp. 141-142; y *Gaceta de Madrid*, 6-XI-1934, n.º 310, p. 1.034; y *Gaceta de Madrid*, 27-XI-1934, n.º 331, pp. 1.612-1.613.

⁴² *Gaceta de Madrid*, 1-XII-1934, n.º 335, p. 1.793; *Gaceta de Madrid*, 4-XII-1934, n.º 338, pp. 1.850-1.851; *Gaceta de Madrid*, 4-XII-1934, n.º 338, pp. 1.855-1.856; y *Gaceta de Madrid*, 7-XII-1934, n.º 341, pp. 1.948-1.949.

⁴³ *Gaceta de Madrid*, 8-I-1935, n.º 8, p. 186; y *Gaceta de Madrid*, 12-II-1935, n.º 43, p. 1.266.

En este periodo los guardias civiles obtuvieron por fin la posibilidad de viajar en ferrocarril presentando el pasaporte o los vales de la cartilla militar. En febrero se reorganizaron sus fuerzas, segregándose la parte de la Compañía Móvil afecta a la Comandancia de Barcelona para integrar la primera del 4º Tercio Móvil y suprimiendo la Secretaría técnica creada con motivo del traspaso. A principios de marzo, se constituyó transitoriamente el Cuerpo de Suboficiales de la Guardia Civil, con los mismos derechos y preeminencias que el del Ejército hasta la constitución del definitivo.⁴⁴ Sin embargo, la Benemérita seguía pidiendo “cuarteles fortificados”, ametralladoras, morteros, lanzallamas y granadas porque consideraba que no era respetada como en el extranjero, donde “un agente de la Autoridad no es un hombre vestido de uniforme o con una simple faja o escudo, sino que es la estatua de la Ley, fría, sorda y muda”.⁴⁵

Finalmente, el 3 de abril Manuel Portela fue elegido ministro de la Gobernación y sus primeras medidas fueron levantar el estado de guerra en Asturias y Cataluña y suspender todas las disposiciones que habían modificado el régimen estatutario desde octubre salvo los servicios de orden público. Respecto a la Guardia Civil, ordenó la publicación de un Reglamento del Parque Automovilista y nombró a una Asesoría Jurídica en la Inspección general para que le aconsejara en sus relaciones con el Ministerio de la Guerra, aunque dejando claro que en cuestiones gubernativas y administrativas debía apoyarse en la Asesoría de Gobernación, comenzando así a reconstruir la frontera competencial entre ambos ministerios.⁴⁶

5. La militarización del orden público

El acceso de José María Gil Robles a la cartera de Guerra el 6 de mayo dio pie a una importante disputa con Manuel Portela, ya que pretendía monopolizar el mando de la fuerza pública militarizándola e influyendo en la designación de sus mandos, apoyándose en militares no especialmente identificados con la República como Fanjul o Franco. También consiguió extender su influjo presionando para que se declarase el estado de guerra cuando no era preciso y creando una nueva comandancia militar, tal y como sucedió respectivamente en Barcelona y Asturias a finales de junio.⁴⁷ Ante esos “intentos de desbordamiento del ejército” sobre su ministerio, Portela reaccionó “manteniendo la supremacía del Poder civil” y colocando la Oficina de Información y Enlace de la DGS bajo sus órdenes; una decisión que fue criticada por la prensa policial porque consideraba que mermaba su autonomía.⁴⁸ Asimismo, en lo tocante al control de

⁴⁴ *Gaceta de Madrid*, 27-I-1935, n.º 27, p. 800; *Gaceta de Madrid*, 8-II-1935, n.º 39, p. 1.168; y *Gaceta de Madrid*, 2-IV-1935, n.º 92, pp. 34-35.

⁴⁵ “Asturias”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, febrero de 1935, n.º 300, pp. 70-72; y “Sobre orden público”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, mayo de 1935, n.º 303, pp. 190-191.

⁴⁶ *Gaceta de Madrid*, 15-IV-1935, n.º 105, p. 362; *Gaceta de Madrid*, 18-IV-1935, n.º 108, p. 563; *Gaceta de Madrid*, 30-IV-1935, n.º 120, pp. 887-890; y *Gaceta de Madrid*, 3-V-1935, n.º 123, p. 976.

⁴⁷ Niceto Alcalá-Zamora, *Memorias (Segundo texto de mis Memorias)*, Barcelona, Editorial Planeta, 1977, pp. 334-335; *Gaceta de Madrid*, 29-VI-1935, n.º 180, p. 2.522; y *Gaceta de Madrid*, 30-VI-1935, n.º 181, p. 2.554.

⁴⁸ Manuel Portela Valladares, *Memorias. Dentro del drama español*, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 95; *Gaceta de Madrid*, 30-V-1935, n.º 150, pp. 1.767-1.768; *Gaceta de Madrid*, 28-VI-1935, n.º 179, p. 2.497; y “Lo retrospectivo y lo presente”, *Policía Española*, 16-XI-1935, n.º 1.422, pp. 13-14.

la vía pública, decidió prohibir el empleo de banderas, emblemas y uniformes para impedir la formación de milicias políticas.⁴⁹

Para reforzar la lealtad de la policía, el ministro gallego concedió beneficios a los hijos y huérfanos de los funcionarios de Investigación y Vigilancia y Seguridad para presentarse a unas oposiciones de auxiliares de oficinas de la DGS, extendiéndolo a la Benemérita dos días después; y concedió al Cuerpo de Seguridad el derecho a usar la bandera nacional apelando al carácter militar de su disciplina y organización.⁵⁰ Y es que el Teniente coronel Fernández López, nuevo jefe de las fuerzas de Seguridad y Asalto gracias a las presiones de Gil Robles, apostaba por “la militarización total de las falanges de Seguridad y Asalto” y la celebración de un “homenaje al mutilado de Seguridad”.⁵¹ Como respuesta, Portela abogó por potenciar los recursos civiles más preventivos, convocando nuevas oposiciones para cubrir las vacantes de los agentes de tercera de Investigación y dieciséis plazas de vigilantes-conductores. Además, anunció la revisión de la separación de 74 funcionarios de Vigilancia acordada el 22 de junio por una “situación de anormalidad e indisciplina”.⁵²

Asimismo, Portela procuraba complacer a la Benemérita para evitar que cayese en la órbita de Gil Robles, especialmente porque las repercusiones de la campaña contra la represión asturiana habían puesto al Instituto a la defensiva: “No debemos olvidar que cuando el banquillo se ve ocupado por un Guardia civil es toda la institución la que en él se sienta”.⁵³ El ministro permitió a los guardias servir sin el uniforme, sustituyó el 4º Tercio Móvil por el 4º Tercio para reforzar la capital, declaró “hechos de guerra” ciertos acontecimientos sangrientos entre mayo y septiembre de 1934 y consiguió que el personal de la Guardia Civil y de Carabineros recibiera asistencia sanitaria.⁵⁴ Además destinó doce millones de pesetas para la reconstrucción de los cuarteles de la Guardia Civil y de Seguridad en Asturias, con el fin de paliar las críticas que había suscitado una orden suya de junio que disponía que las casas-cuarteles fueran capaces de resistir un asedio sin que parecieran “fortines inexpugnables”.⁵⁵ También autorizó a los miembros del Instituto a usar el ansiado impermeable, reguló la percepción de los quinquenios por parte de los suboficiales y consiguió que dejara de ser obligatorio para ingresar si sobraban vacantes el haber servido tres años en el Ejército o dos en el caso de los hijos y huérfanos del Cuerpo, tal y como había ordenado el ministro de la Guerra el 13 julio;

⁴⁹ *Gaceta de Madrid*, 7-VI-1935, n.º 158, p. 1.998; y *Gaceta de Madrid*, 23-VI-1935, n.º 174, pp. 2.381-2.382.

⁵⁰ *Gaceta de Madrid*, 17-V-1935, n.º 137, pp. 1.404-1.405; *Gaceta de Madrid*, 26-V-1935, n.º 146, p. 1.669; y *Gaceta de Madrid*, 12-VI-1935, n.º 163, pp. 2.111-2.112.

⁵¹ “El Teniente coronel señor Fernández López, expone a ‘Policía Española’ interesantísimos proyectos e iniciativas”, *Policía Española*, 2-VII-1935, n.º 1.413, pp. 10-11; y Manuel Portela Valladares, *Memorias...*, p. 146.

⁵² *Gaceta de Madrid*, 17-VII-1935, n.º 198, p. 626; *Gaceta de Madrid*, 16-VII-1935, n.º 197, pp. 582-583; y *Gaceta de Madrid*, 13-VII-1935, n.º 194, pp. 473-474.

⁵³ “Necesidad de crear Defensores Letrados para los miembros procesados de la institución policial”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, julio de 1935, n.º 305, p. 294.

⁵⁴ *Gaceta de Madrid*, 16-VI-1935, n.º 167, pp. 2.228-2.229; *Gaceta de Madrid*, 21-VI-1935, n.º 172, pp. 2.331-2.332; *Gaceta de Madrid*, 28-VI-1935, n.º 179, p. 2.497; y *Gaceta de Madrid*, 20-VII-1935, n.º 201, pp. 737-738.

⁵⁵ *Gaceta de Madrid*, 27-VII-1935, n.º 208, pp. 908-909; y “Las casas-cuarteles”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, agosto de 1935, n.º 306, p. 30.

una medida que la prensa de la Benemérita no veía necesaria porque argumentaba que el Instituto no era un “Cuerpo militarizado” sino un “Arma del Ejército”.⁵⁶

Esta disputa también se reflejó en las medidas relacionadas con la tenencia de armas. Gil Robles modificó el reglamento para facilitar que los generales, jefes y oficiales pudieran adquirir pistolas y revólveres con dispositivo ametrallador y culatín, y armas cortas y largas rayadas; y declaró por ley que todos los establecimientos de fabricación de armas, municiones, pólvoras, explosivos y productos incendiarios quedasen “agregados al Ejército” pero no “totalmente militarizados”, salvo que se declarase el estado de guerra o en caso de “posible alteración del orden público”.⁵⁷ En cambio, Portela endureció las medidas disponiendo que no se legalizase ningún arma corta o larga rayada sin marca o número de fabricación y dio dos meses para su entrega, incluyendo a aquellos propietarios o funcionarios de los ayuntamientos que tuvieran armas legales sin dicha muesca. Además, el 13 de septiembre se aprobó otro reglamento de armas y explosivos que ratificaba el papel controlador de la Guardia Civil y adicionaba un artículo indicando que el ministro de la Gobernación era la “única Autoridad” facultada para resolver dudas y dictar disposiciones complementarias, anunciando que en cuatro meses se anularían todas las licencias gratuitas concedidas excepto aquellas que recibiesen permiso del propio ministro.⁵⁸

El problema era que estas medidas iban contra la simpatía que despertaba entre la corriente más militarista de la fuerza pública la formación de guardias cívicas, como la constituida por Batet tras la insurrección catalana a partir de los restos del somatén.⁵⁹ Precisamente los problemas de coordinación entre las diferentes fuerzas oficiales y oficiosas generaron la necesidad de aprobar un decreto el 16 de septiembre que ordenaba que el ministro de la Gobernación, el director general de Seguridad en Madrid y los gobernadores civiles en provincias constituirían juntas para coordinar los servicios de Miqueletes, Miñones, Mossos d'Esquadra, Vigilantes de caminos, guardas jurados y peones, cuya inspección asumiría la Guardia Civil; además de guardias y empleados municipales, de los que se encargarían los comisarios generales de Policía.⁶⁰

El 25 de septiembre Joaquín de Pablo-Blanco suplió a Portela en Gobernación, lo que disminuyó sustancialmente el conflicto con Gil Robles. El nuevo ministro trató de ganarse el favor de la policía ordenando sobreeser los expedientes, las multas, las suspensiones y las pérdidas de puestos de los guardias de Seguridad; y permitiendo a sus miembros presentarse a las oposiciones de vigilantes-conductores sin límite de

⁵⁶ *Gaceta de Madrid*, 1-VIII-1935, n.º 213, p. 1.074; *Gaceta de Madrid*, 7-VIII-1935, n.º 219, p. 1.228; *Gaceta de Madrid*, 10-VIII-1935, n.º 222, p. 1.300; *Gaceta de Madrid*, 18-VII-1935, n.º 199, pp. 646-647; y “El voluntariado en el Ejército y el ingreso en la Guardia Civil”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, agosto de 1935, n.º 306, pp. 341-342.

⁵⁷ *Gaceta de Madrid*, 9-VII-1935, n.º 190, p. 339; y *Gaceta de Madrid*, 12-VII-1935, n.º 193, pp. 423-424.

⁵⁸ *Gaceta de Madrid*, 26-VI-1935, n.º 207, pp. 877-878; y *Gaceta de Madrid*, 14-IX-1935, n.º 257, pp. 2.080-2.089.

⁵⁹ “Agrupación de Acción Ciudadana”, *El Benemérito Español*, agosto de 1935, n.º 1, pp. 37-38.

⁶⁰ *Gaceta de Madrid*, 18-IX-1935, n.º 261, pp. 2.173-2.178; *Gaceta de Madrid*, 22-X-1935, n.º 295, p. 596; *Gaceta de Madrid*, 31-X-1935, n.º 304, p. 846; y *Gaceta de Madrid*, 6-XI-1935, n.º 310, p. 1.055.

edad.⁶¹ Sin embargo, la concesión del carácter de agentes de la autoridad a los mismos y el cierre de la Escuela de Policía el 1 de noviembre no sentaron nada bien entre los cuerpos policiales, cuya prensa esperaba que fuera solo una medida de “salubridad” que le permitiera adoptar nuevas orientaciones cuando resurgiera. Como respuesta, el ministro anunció que la separación de los 74 agentes de Investigación se limitaría a la revisión de siete casos a los que se les instruiría expediente individual.⁶²

Este cambio suponía un aumento de la influencia de la CEDA que se materializó en el nombramiento de Santiago Martín Báguenas como delegado general del orden público en Cataluña y en el endurecimiento de la Ley de Vagos y Maleantes mediante una adición que posibilitaba declarar “peligrosos como antisociales” a aquellos que incitaran o hicieran apología de los delitos de terrorismo o atraco, pudiendo ser internados, obligados a residir en cierto lugar o sometidos a vigilancia.⁶³

Asimismo, la Guardia Civil obtuvo algunas mejoras con el nuevo ministro de la Gobernación, como el reconocimiento del servicio de los agentes procedentes del Colegio de Guardias Jóvenes desde los catorce años a efectos del recuento de quinquenios o la convalidación del aumento del 50% sobre las dietas y pluses devengados para aquellos funcionarios que sirvieron en octubre de 1934 en Asturias y Cataluña. Además, a finales de noviembre se permitió que los individuos del Ejército y la Armada pudieran incorporarse a la Guardia Civil inmediatamente, sin tener que esperar a cumplir su compromiso con aquellas Armas, lo que satisfacía los anhelos de autonomía de la Benemérita respecto al poder militar.⁶⁴

Por último, los homenajes militares se incrementaron notablemente y comenzaron a incluir a las fuerzas auxiliares. De este modo, se entregaron la Medalla por Sufrimientos por la Patria al personal civil distinguido en Octubre y la Cruz de la Orden del Mérito Militar a dicho personal, a los gobernadores civiles de Madrid, Palencia, La Coruña y Asturias y a ciertos miembros de la escala de complemento. Además, la fuerza pública también obtuvo su recompensa, ya que un decreto prohibió declarar días festivos en honor de hechos que menoscabasen su prestigio.⁶⁵

6. La profesionalización de las fuerzas policiales

El 14 de diciembre de 1935 se constituyó un nuevo gabinete con Manuel Portela como presidente y ministro de la Gobernación. Sus premisas eran sencillas: “Sin orden público no puede haber tranquilidad ciudadana, ni garantía de vida, ni desenvolvimiento de la economía, ni casi posibilidad de existencia”, por lo que la “República, o lo es de orden o deja de existir”; aunque era consciente de que esto no se conseguiría solo con

⁶¹ *Gaceta de Madrid*, 29-IX-1935, n.º 272, p. 2.433; *Gaceta de Madrid*, 2-X-1935, n.º 275, p. 27; y *Gaceta de Madrid*, 14-XI-1935, n.º 318, pp. 1.263-1.264.

⁶² *Gaceta de Madrid*, 12-X-1935, n.º 285, pp. 260-261; Martín Turrado Vidal, *La Policía...*, p. 221; “La enseñanza profesional”, *Policía Española*, 2-XII-1935, n.º 1.423, pp. 9-10; y *Gaceta de Madrid*, 14-XI-1935, n.º 318, pp. 1.263-1.264.

⁶³ *Gaceta de Madrid*, 20-XI-1935, n.º 324, pp. 1.427-1.428; *Gaceta*, 27-XI-1935, n.º 331, p. 1.670; y *Gaceta de Madrid*, 28-XI-1935, n.º 332, p. 1.715.

⁶⁴ *Gaceta de Madrid*, 31-X-1935, n.º 304, p. 847; *Gaceta de Madrid*, 28-XI-1935, n.º 332, p. 1.715; y *Gaceta de Madrid*, 29-XI-1935, n.º 333, p. 1.775.

⁶⁵ *Gaceta de Madrid*, 13-X-1935, n.º 286, p. 282; *Gaceta de Madrid*, 16-X-1935, n.º 399, pp. 399-403; *Gaceta de Madrid*, 2-XI-1935, n.º 306, p. 943; y *Gaceta de Madrid*, 1-XII-1935, n.º 335, p. 1.842.

“la violencia del fusil despejando la calle o el sable amenazando las cabezas”, lo que le llevaba a ser más tolerante con las organizaciones de izquierda.⁶⁶ Su política buscaba profesionalizar a las instituciones policiales potenciando su autonomía para apartar al Ejército de la administración del orden. Un propósito que encajaba con el sentir de la prensa policial, la cual consideraba que, tras un “periodo pasado de casi dos años de un mando funesto sin par para la Policía”, era “preciso ir reconstruyendo y rescatando” todo lo que se había dejado “arrebatar estúpidamente”; que su futuro reglamento debía inspirarse en preceptos esencialmente “policíacos”; y que debía publicarse alguna disposición que certificara el derecho de los guardias de Seguridad a ejercer el voto. Portela consiguió al menos que la Junta Central del Censo hiciera algunas declaraciones al respecto, creó las Secciones Autónomas de Vigilancia y Seguridad en el Parque Móvil y encargó a Vicente Santiago la redacción de un proyecto de reorganización civilista de la Policía que sería abandonado con el cambio de gobierno.⁶⁷

Respecto a las armas, su ideario liberal le hacía respetar escrupulosamente el derecho individual a la defensa personal. Por ello prorrogó el plazo para la legalización de las escopetas de caza de cañón de ánima lisa o rayado con recámara para cartuchos no metálicos hasta el 31 de mayo. También decretó que en las poblaciones rurales menores de 10.000 habitantes de Cataluña podrían formarse somatenes a las órdenes de la autoridad estatal encargada del orden público; bajo la inspección, la organización y el mando de la Guardia Civil; revestidos del carácter de “Agentes de la Autoridad” y con derecho a solicitar gratuitamente licencia de armas. No obstante, esta medida significaba más una concesión a las autoridades catalanas que una política de armamento de fuerzas civiles como la implementada por Salazar Alonso.⁶⁸

La institución de orden público más beneficiada por Portela fue la Guardia Civil, parte de la cual seguía defendiendo “la identidad de armamentos con el Ejército”; sentía que la vida, la propiedad y el principio de autoridad y de orden se habían depreciado; y negaba “la distinción entre el mal llamado delito político y el delito vulgar” por ser “el moderno disfraz de los facinerosos”.⁶⁹ Para engrandecer su satisfacción interior, Portela autorizó el 11 de enero un proyecto de decreto-ley que aumentaba el sueldo de los tenientes, alféreces y asimilados de todas las Armas y Cuerpos del Ejército modificando el régimen de quinquenios. Además, el día 14 extendió a la Guardia Civil los preceptos de la ley de 4 de diciembre que disponía el paso de los subtenientes a formar parte de la oficialidad del Ejército con la categoría de alférez, con sus derechos y consideraciones, limitando el Cuerpo de Suboficiales a brigadas y sargentos. En suma, debido a la falta de efectivos de Seguridad y de Investigación y Vigilancia en el campo, dispuso que la

⁶⁶ “La facultad de elegir y el acierto en la elección”, *Policía Española*, 16-VI-1935, n.º 1.412, p. 7; y Manuel Portela Valladares, *Memorias...*, p. 89.

⁶⁷ “La posible labor reconstructiva”, *Policía Española*, 16-I-1936, n.º 1.426, p. 5; “El reglamento de Policía Gubernativa”, *Policía Española*, 16-I-1936, n.º 1.426, pp. 9-10; “El voto de los funcionarios”, *Policía Española*, 2-II-1936, n.º 1.427, p. 12; y *Gaceta de Madrid*, 4-I-1936, n.º 4, p. 129.

⁶⁸ *Gaceta de Madrid*, 9-I-1936, n.º 9, p. 235; y *Gaceta de Madrid*, 22-I-1936, n.º 22, pp. 675-676.

⁶⁹ “Charlas sobre armamento”, *Revista Técnica de la Guardia Civil*, diciembre de 1935, n.º 310, pp. 521-522; “La delincuencia actual”, *Marte*, 12-XII-1935, n.º 1.492, p. 1; y “Policía civil”, *El Benemérito Español*, diciembre de 1935, n.º 5, pp. 9-10.

Benemérita asumiera las funciones de inspección y disciplina de los guardias y empleados municipales allí donde no hubiera policías.⁷⁰

Asimismo se hizo extensivo al Instituto el decreto de 7 de julio de 1934 que disponía que para ingresar en el Cuerpo de Carabineros los tenientes de Infantería y Caballería debían proceder de las respectivas academias de las Armas, lo que permitía elevar la preparación de los futuros oficiales. Por otro lado, se destinaron 350.000 pesetas para sufragar los servicios de la Guardia Civil en la insurrección asturiana y costear la reparación de edificios; la adquisición de mantas, utensilios y menaje; y la requisita y adquisición de vehículos. Además, como reconocimiento al Cuerpo, se declaró “hecho de guerra” un atraco en la estación de Puig de 11 de enero que fue impedido por dos guardias civiles, uno de los cuales resultó muerto.⁷¹ Finalmente, el rechazo de Portela del ofrecimiento que le hizo Franco para mantenerle en el Gobierno tras los comicios de febrero por entender que constituía una nueva “Sanjurjada”, supuso el punto y seguido de una política desmilitarizadora que se intensificaría con los gobiernos siguientes hasta la sublevación del 18 de Julio de 1936.⁷²

7. Conclusión

En resumen, Martínez Barrio intentó reforzar la autoridad de la fuerza pública y consolidar su apoyo rectificando algunos cambios de los gobiernos del primer bienio, aplicando la ley sin mirar el color político y restringiendo la tenencia de armas. Además, su política siguió siendo civilista pese a declarar el estado de guerra en la insurrección de diciembre de 1933 y multiplicar los actos de homenaje militares a la fuerza pública. En contraposición, la política contrarrevolucionaria, contrarreformista y militarista de Salazar Alonso pretendía maximizar la satisfacción de la fuerza pública, especialmente la de la Benemérita, amnistiando a los implicados en la “Sanjurjada”, intensificando la persecución de la izquierda obrera y facilitando el armamento de los auxiliares civiles, las guardias privadas de los grandes terratenientes y los funcionarios del orden en activo y retirados, al tiempo que castigaba la tenencia entre los sindicatos; dando pie así a una fuerza coactiva más numerosa aunque mucho menos profesional y controlable.

La “pacificación” de Octubre de 1934 consistió en una represión sin precedentes protagonizada por las tropas del Protectorado y caracterizada por la ocupación militar del territorio y la constitución de numerosos consejos de guerra, el “rescate” de los servicios de orden público de Cataluña y el restablecimiento de la pena de muerte. Este cambio de política fomentó la militarización de una fuerza pública que presionaba fuertemente para obtener armamento y fortificaciones de guerra, aunque a la hora de la verdad la policía acabaría rechazando el proyecto de reorganización de Vaquero.

En mayo de 1935, la designación de Gil Robles como ministro de Guerra fortaleció la ofensiva militarizadora sobre las instituciones de orden público. Como respuesta, Portela reforzó su control sobre ciertos organismos, aumentó las concesiones

⁷⁰ *Gaceta de Madrid*, 12-I-1936, n.º 12, p. 299; *Gaceta de Madrid*, 15-I-1936, n.º 15, p. 355; y *Gaceta de Madrid*, 15-I-1936, n.º 16, p. 435.

⁷¹ *Gaceta de Madrid*, 13-II-1936, n.º 44, p. 1.322; *Gaceta de Madrid*, 14-II-1936, n.º 45, pp. 1.347-1.348; y *Gaceta de Madrid*, 16-II-1936, n.º 47, pp. 1.394-1.395.

⁷² Pilar Mera Costas, *Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares*, Tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2015, pp. 315-318.

a la Benemérita para alejarla del Ejército, restringió el empleo de las armas a los grupos ajenos a las fuerzas policiales y favoreció a los sectores más civilistas entre la policía. Su ascenso a la Presidencia del Gobierno y su retorno al Ministerio de la Gobernación se tradujeron en una política desmilitarizadora y profesionalizadora, más conciliadora con los socialistas y los nacionalistas catalanes, que buscaba satisfacer más demandas de una Guardia Civil que, pese a ser militar, valoraba especialmente su autonomía respecto al Ejército y de una Policía que esperaba con ilusión el proyecto de reorganización civilista de Vicente Santiago, que finalmente no sería aprobado.

Como conclusión, debe superarse esa imagen del Estado como “Leviatán”, como una máquina monstruosa perfectamente engrasada para reprimir y explotar a la ciudadanía. En realidad, la Administración estaba compuesta por diversos actores de carne y hueso, cuyas interacciones entre sí y con otros agentes sociales dieron forma a distintas políticas coactivas. Desde esta perspectiva, la represión no habría derivado tanto del mantenimiento de una concepción predemocrática del orden inspirada en la defensa del principio de autoridad, sino de la proliferación de múltiples concepciones de la autoridad entre los sujetos encargados de ejercerla y el surgimiento de significados menos alejados de la noción democrática actual de la “seguridad pública”. Podría decirse que fue la falta de eficiencia derivada de una implementación descoordinada, incoherente y discontinua de las políticas de orden público lo que disparó el uso de la coerción. Y es que, aunque los actores políticos, militares y policiales compartieran la idea de que el régimen, la patria o la sociedad solo subsistirían si se mantenía el principio de autoridad, tenían formas muy distintas de entenderlo y de practicarlo.